



Comunidad de Madrid  
Consejería de Gobernación

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL

Plaza de Chamberí, 8 • Teléfono 445 09 12 • Madrid

# EL DERECHO DEL VECINO Y DEL CONCEJAL A LA INFORMACION MUNICIPAL

# 22

12/88.570



ABRIL 1986

Ayuntamiento de Madrid

FM - 3070

## 1. El derecho de información administrativa en general

Como es sabido, la Constitución Española de 1978, en su artículo 105, se refiere a este derecho de información de la manera siguiente: La Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los Archivos y Registros Administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Ya dentro de la esfera municipal, podemos referirnos a lo que se ha denominado "estatuto del vecino", conjunto de derechos y deberes que el vecino posee frente al Municipio. De los derechos vamos a tratar únicamente del derecho a la información municipal, que definimos como el poder jurídico concedido al vecino de ser informado tan ampliamente como precise su interés, en relación con todos los expedientes y documentación municipal.

## 2. Derecho de información municipal del vecino

El derecho a la información municipal, tal como se ha definido, tiene, a nuestro juicio, la naturaleza de derecho subjetivo, ya que se trata de una facultad reconocida y garantizada por el Ordenamiento Jurídico (concepto de derecho subjetivo reconocido en sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1981) que arranca, sin duda, de la propia posición jurídica del vecino frente al Municipio, que le hace como tal sujeto de derechos y deberes.

La categoría de vecino aparece establecida en nuestro Derecho por la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, posteriormente recogida en el Estatuto Municipal de 1924, Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 y Ley de Régimen Local de 1955. Hoy, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, entiende por vecino el español mayor de edad que reside habitualmente en un término municipal y que figura inscrito con tal carácter en el padrón (artículo 16.2).

El artículo 18 del mismo texto legal, en su apartado 1, e), taxativamente manifiesta como derecho del vecino el de ser informado, previa petición razonada, en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

Tal declaración se concreta más adelante en el repetido texto, y así, el artículo 69.1, afirma la obligación de las Corporaciones Locales de facilitar la más amplia información sobre su actividad, y el artículo 70.3 expresa el derecho de todos los ciudadanos a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes, así como a consultar los Archivos y Registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, letra b), de la Constitución. Afirma también, en el mismo párrafo, que la denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.

## 3. Derecho de información municipal de los Concejales

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dedica un capítulo al Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales y, dentro de este Estatuto, figura precisamente el derecho de información administrativa municipal de los Concejales. El artículo 77 de la tantas veces citada Ley 7/1985, de 2 de abril, afirma que "todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente, o de la Comisión de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o información obren en poder de los Servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función".

La Ley, no contenta con reconocer un derecho general a los

vecinos y ciudadanos, ha querido concretar aún más, si cabe, el derecho que los Concejales tienen a obtener la información que precisen para el correcto desarrollo de su función. No hay que olvidar a este respecto que, por un lado, el Pleno, de conformidad con el artículo 22 de la Ley básica, tiene, entre otras atribuciones, el control y fiscalización de los órganos de Gobierno y, por otro lado, no hay que olvidar tampoco que los miembros de las Corporaciones Locales, según señala el artículo 78.2, son responsables de los acuerdos que hubiesen votado favorablemente; por lo que tanto en un aspecto como en otro, les es absolutamente imprescindible a los miembros de las Corporaciones encontrarse completa y rectamente informados. Es por esto, sin duda, por lo que la Ley les reconoce efectivamente el derecho de información al que hemos aludido.

## 4. El patrimonio histórico español y el derecho de información municipal

Hemos señalado lo que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en relación con el derecho de información. Aún tenemos que hablar también de lo que en relación con este derecho establece la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

La citada Ley, después de definir el patrimonio documental como el conjunto de documentos de cualquier época, generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función, por cualquier organismo o entidad de carácter público, como pueden ser y son, sin duda, los Ayuntamientos, afirma, en su artículo 57, lo siguiente:

a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre consulta, a no ser que afecten a materias clasificadas, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado o la averiguación de los delitos.

c) Los documentos que contengan datos personales, de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole, que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.

Como vemos, también aquí queda claro el derecho de información que corresponde al ciudadano para acercarse a aquella documentación que se encuentre en los Archivos Municipales, dentro de las limitaciones que señala dicho artículo y a las que nos vamos a referir a continuación.

## 5. Limitaciones al derecho a la información municipal

De los textos legales que hemos citado, entendemos que pueden encontrarse las siguientes limitaciones al derecho de información:

1. La seguridad y defensa del Estado (artículo 70.3, Ley 7/1985).
2. La averiguación de los delitos (artículo 70.3, Ley 7/1985).
3. La seguridad, honor e intimidad de las personas (artículo 70.3, Ley 7/1985, y artículo 57, Ley 13/1985).

Estas tres limitaciones proceden directamente, en definitiva, de la Constitución Española, artículo 105, b).

4. Materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales (artículo 57.1, Ley 13/1985, sin perjuicio de autorizaciones especiales).

5. Materias que no deben ser publicadas por disposición expresa de la Ley (artículo 57.1, Ley 13/1985, sin perjuicio de autorizaciones especiales).
6. En razón de la conservación de los fondos (artículo 62, Ley 13/1985).
7. Por razón de la función de la propia institución (artículo 62, Ley 13/1985).
8. Por razón de las disponibilidades efectivas de tiempo, lugar y medios personales.

Esta última limitación merece unas líneas de explicación, puesto que no aparecen en la letra de los textos legales citados, sino que deviene de las exigencias generales de eficacia y seguridad que deben presidir cualquier servicio de carácter administrativo, como es el servicio de información municipal. En esta limitación incluimos aquella necesidad de medios físicos y humanos que requiere un Archivo tanto de carácter general como el archivo de oficina, y que puede permitir el ejercicio adecuado del derecho a la información, tanto por parte del vecino como por parte del Concejal. A todas luces es evidente que no puede facilitar el ejercicio del derecho a la información de la misma forma un Municipio dotado de medios personales suficientes, con archivero y funcionarios administrativos que puedan disponer del tiempo preciso para atender tranquilamente al vecino, que pretende una información determinada, como la situación de aquellos Municipios totalmente escasos de medios, y muy especialmente de medios personales, en los cuales su, a veces, único funcionario tiene que distribuir su tiempo entre todas las necesidades administrativas perentorias, además de atender en el ejercicio de su derecho de información al vecino o al miembro de la Corporación Local.

Dentro de este capítulo de limitaciones debemos incluir la controversia jurídica suscitada sobre si el derecho de información municipal puede ser ejercitado ya o es preciso, por el contrario, una ley de desarrollo del principio constitucional, o unas normas de la Comunidad Autónoma, o un Reglamento de Organización del Municipio, sin cuyos requisitos legales no sería posible ejercer tal derecho. El Tribunal Supremo, con fecha 16 de octubre de 1979, consideró el apartado b), del artículo 105, como de carácter programático, es decir, sin aplicación directa, por lo que sería preciso para su aplicación una ley de desarrollo sin la cual carecería de virtualidad. Sin embargo, también hay que señalar que el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 8 de junio de 1981, al referirse a la reserva de la Ley del artículo 105, afirma "que no tiene el significado de diferir la aplicación de los derechos fundamentales y libertades públicas, hasta el momento en que se dicte una ley posterior a la Constitución, ya que, en todo caso, sus principios son de aplicación inmediata". Así lo ha entendido también la sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla, de 21 de mayo de 1982.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, dictada con posterioridad a estas sentencias, a nuestro juicio, aclara en una gran medida la situación, ya que afirma taxativamente, en su artículo 69, que las Corporaciones facilitarán la más amplia información sobre su actividad, y en su artículo 77, que todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en la Corporación, sin que dicha obligación y derechos de los Concejales aparezcan limitados por la necesidad de reglamentación o leyes desarrollando el artículo 105.

Es cierto que, en efecto, es preciso un desarrollo reglamentario, que las Comunidades Autónomas pueden regular la materia de archivos según la Constitución Española, que el artículo 18 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local afirma el derecho a ser informado dentro del contexto del artículo 105 de la Constitución y el artículo 70.3 entenderá en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, b), de la Constitución. Pero también es cierto que el derecho genérico de información municipal está claramente reconocido en la Ley, no sólo en la Ley de Bases de Régimen Local, sino también en la Ley del Patrimonio Histórico Español, de forma suficiente para poder ser ejercido desde este momento, y sin perjuicio de que se dicten en su día las normas oportunas que determinen con claridad las limitaciones y señalen los extremos dentro de los cuales debe ejercitarse este derecho de información.

## 6. El ejercicio del derecho

Entendemos a partir de los textos legales señalados que el ejercicio del derecho debe realizarse mediante petición escrita y razonada, dirigida al Alcalde-Presidente de la Corporación, no al Secretario de la misma, tanto se trate de un vecino como, por el contrario, sea solicitada por un miembro del Ayuntamiento. Recibida en el Registro dicha petición razonada, será elevada al Alcalde-Presidente, el cual deberá contestar necesariamente al solicitante, teniendo en cuenta las limitaciones a que hemos hechos referencia en el punto 5, y en cualquier caso, también, las condiciones de tiempo y lugar, medios personales y materiales de que dispone la Administración Municipal. La resolución en cualquier caso, como señala el artículo 70.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá ser motivada; esto es, no podrá arbitrariamente denegarse el derecho a la información; la denegación deberá proceder mediante resolución motivada, en la que se señalen claramente cuáles son las causas de la misma y contra la cual podrán interponerse los oportunos recursos.

Finalmente, debemos señalar también que no sólo la Ley reconoce al vecino y al Concejal un derecho a la información, sino que, además, esta información debe ser una información veraz, ya que, como ha señalado la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1982, los ciudadanos tienen derecho a una información veraz sobre hechos o actos que de alguna manera les afecten y, por supuesto, sobre aquellos de general interés o preocupación.

El ejercicio del derecho a la información debe, por un lado, pues, exigir al Ayuntamiento que adopte las medidas precisas para poder hacer efectivo dicho derecho no sólo mediante la producción de las normas de organización precisas, sino también mediante la adecuación de medios materiales y personales, y, por otro lado, exige al vecino, o en su caso al Concejal, la racionalidad en el ejercicio del derecho y la adecuación a la situación fáctica de archivos y oficinas municipales. De esta forma, unos y otros, con el conocimiento exacto de los hechos, documentos y expedientes que constituyen la vida diaria y el pasado de las Corporaciones, podrán integrarse más fácilmente en la comunidad vecinal, que, en definitiva, constituyen los Municipios.



Es claro que, en todo, el proceso de desarrollo regional...  
...de las Comarcas...  
...de las Comarcas...  
...de las Comarcas...

## 6 El ejercicio del derecho

El ejercicio del derecho...  
...de las Comarcas...  
...de las Comarcas...  
...de las Comarcas...

El ejercicio del derecho...  
...de las Comarcas...  
...de las Comarcas...  
...de las Comarcas...



Comunidad de  Madrid